

CONTRATO DE EDUCACION PRIVADA. Locación de servicios. FACULTAD DE ADMISION. Negativa de la institución a aceptar la matriculación de un alumno para el período lectivo siguiente CAUSA 89671 - "L., L.y o.c/Northlands, Asoc. Civil de Beneficencia s/amparo" - CAMARA PRIMERA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SAN ISIDRO (Buenos Aires) - SALA II - 18/06/2002

fc

Asesoramiento Jurídico a Docentes
Dr. Fernando Carlos IBÁÑEZ
Docente – Abogado

Tel: (011) 4487 – 1496
abogado@fernandocarlos.com.ar
www.fernandocarlos.com.ar

RESUMEN:

"Tratándose en el caso, más que de la admisión de una nueva alumna, de la continuidad de su estudio en el mismo colegio mediante la matriculación para el año siguiente, la facultad de no admisión debe ejercerse de modo que no sea arbitrario o irregular.

Frente a los derechos que sin duda asisten a los actores para expresarse libremente y para escoger la educación que para su hija prefieran, se yergue también el del instituto educativo privado a rehusar la admisión y permanencia de los alumnos.

Es de toda obviedad que -allende la mayor o menor potencialidad hiriente que pudiese atribuírsele al e-mail remitido por los actores, según cada individual susceptibilidad-, el despacho fue causa de una situación de tensión entre la institución educativa y los actores.

Tensión, agrego, que pudo haber sido disipada mediante la aconsejada palinodia, a la que los actores no accedieron.

Así fuese justísima la causa que animara a su remitente a propagar los conceptos en él vertidos, no menos cierto es que se ofendieron las autoridades del colegio de su hija, y no obtuvieron la compunción de aquél.

Tal obduración hace irrelevante que la susceptibilidad de aquéllas fuera excesiva, o que asistiese razón al actor para estar disconforme con el aumento del precio de la matriculación o con los costos escolares, porque afectó al diálogo necesario en una óptima comunidad educativa como la que la demandada dice ser, y los actores dicen pretender.

En consecuencia, el derecho que a la demandada asistía no se ejerció de modo irrazonable ni abusivo. Cuanto más si se repara -por notorio- en la multiplicidad de buenas escuelas privadas y públicas en la misma vecindad, no habiendo perdido la niña su educación en el presente ciclo."

Fallo publicado en www.fernandocarlos.com.ar

TEXTO COMPLETO

En la ciudad de San Isidro, a los 18 días del mes de Junio de dos mil dos, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, doctores Juan Ignacio Krause, Roger André Bialade y Daniel Malamud, para dictar sentencia en el juicio: "L., Luis Alejandro y otra c/NORTHLANDS, Asociación Civil de Beneficencia s/amparo (causa 89.671))".

Practicado el sorteo (arts. 168 de la Constitución y 263 del CPCC), resulta deber observarse el siguiente orden: Dres. Malamud, Bialade y Krause;; y plantear y votar las siguientes CUESTIONES

1ª ¿Es nula la sentencia apelada?

2ª En caso contrario, ¿es justa?

3ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACION

A la primera cuestión, el Juez Malamud dijo:

El recurso de nulidad previsto por el art. 253 del CPCC, comprendido en el de apelación, sólo resulta procedente cuando la resolución apelada presenta vicios en su construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional, es decir, cuando presenta irregularidades de forma o defectos de contenido que la afecten en sí misma y revistan tal gravedad que pongan en peligro los derechos que asisten al apelante, y no puedan ser reparados por vía de la apelación (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal", Tº 1, pág. 790).// No invocado ni demostrado que esta vía resulte insuficiente, voto por la negativa. A la misma cuestión, los señores Jueces doctores Bialade y Krause, por iguales consideraciones, votaron también por la negativa.

A la segunda cuestión, el Juez Malamud dijo:

1

Hubo un contrato de educación entre los padres de una menor y el colegio de propiedad de la demandada, convención en que predominan los caracteres de la locación de servicios (conf., MASNATTA, "El contrato atípico", ABELEDO-PERROT, pág. 29), y con cuyo motivo la menor cursara sus estudios en aquél, a lo largo de los años. Y reclaman amparo los actores contra la determinación por la institución, en noviembre de 2001, de no aceptar la matriculación de su hija para el curso de 2002, en lo que apostrofan como acto que lesiona, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho de aprender consagrado por el art. 14 de la Const. Nacional.

2

La procedencia de la demanda requiere la acabada demostración de que la referida negativa constituyera una ilegalidad manifiesta de parte de la demandada y una restricción, lesión o amenaza a un derecho o libertad

constitucionalmente reconocidos a la hija de los actores. La libertad de enseñar no retacea la facultad de los institutos educativos para seleccionar a su criterio a quiénes han de impartir la enseñanza (conf., comentario de Bidart Campos al fallo "Echegaray Ferrer", C3^oCC Córdoba, 16-8-83, en E.D. 109, 498). Ello porque nadie puede obligar a otro a hacer alguna cosa, o restringir su libertad, sin haberse constituido un derecho especial al efecto (art. 910 C. Civ.), principio que cobra validez ante la inexistencia de una reglamentación que obligue a la sucesiva matriculación, o de algún contrato que comprometiera al colegio a mantener la inscripción de los alumnos.

Los apelantes incurren a ese respecto en una grave tergiversación al sostener a fs. 355 que (el juez) "omite, infundadamente, aplicar la sanción que disponen los decretos 2417/93 y 365/93, cuando la comunicación de la decisión de no matriculación no es efectuada antes del 31 de octubre (...) Y surge ... de las constancias de autos que esa decisión recién fue comunicada, en forma fehaciente, en fecha 12 de noviembre..., es decir, una vez que el plazo para ejercer ese derecho había fenecido", calificando entonces como "extemporánea y, consecuentemente inválida", la decisión de no matriculación.

La segunda de las normas que, según los apelantes, debió el juez aplicar (decreto 365 del 5 de marzo de 1993), fue derogada por la primera que también invocan (art. 17 del decreto 2417 del 19-11-1993).

En cuanto al decreto 2417, no contiene disposición alguna que limite al 31 de octubre o a cualquier otro día la comunicación de la decisión de no matriculación. Más aún; no contiene disposición alguna relativa a la hipótesis en estudio, y ni por remota implicancia aborda el supuesto de que el instituto decidiera no inscribir a un alumno para el siguiente año. El rigor del -inmerecido- reproche dirigido al a quo, se vuelve entonces contra quienes lo profirieron, porque si bien el decr. 2417 fija la fecha límite del 31 de octubre, no lo hace para que el instituto se pronuncie con efectos preclusivos sobre la admisión de los alumnos para el año siguiente, sino para que informe a los padres o a los responsables de aquéllos, y para el período lectivo siguiente, sobre el importe de la matrícula y condiciones de su reintegro en caso de arrepentimiento; la cantidad y monto de las cuotas totales por servicios educativos, con discriminación de conceptos; y forma y plazo de pago y determinación de los recargos para el caso de mora (art. 1º del decr. 2417/93).

Se trata de una norma que no tiene relación con el pretendido agravio ni con el objeto de la presente acción. El comentado efugio de los apelantes es entonces, no solo inaceptable, sino a ellos adverso, como presunción hominis emergente de su conducta procesal (art. art. 163 inc. 5º CPCC), por cuanto contiene tal ocultamiento malicioso de la verdad, que lo hace sospechoso de negarla toda (SCBA., DJBA 119, 822, cit. por MORELLO y otros "Códigos...", vol. II-C, pág. 31).

fc

*Mantenga actualizada
su Normativa de Educación.*

Solicite actualizaciones a:

normas@fernandocarlos.com.ar

Tel: (011) 4487 – 1496

3

Tratándose en el caso, más que de la admisión de una nueva alumna, de la continuidad de su estudio en el mismo colegio mediante la matriculación para el año siguiente, la facultad de no admisión debe ejercerse de modo que no sea arbitrario o irregular (causa 45.770 del 20-10-1987). Es entonces menester desentrañar si la conducta de la demandada, en su decisión cuestionada, ha sido abusiva, o si, por el contrario, hizo así ejercicio regular de un derecho que le es propio conforme a las disposiciones normativas, legales y contractuales, vigentes (arts. 14 de la C.N.; 1071, 1197 y conchs. del C. Civil; y Condiciones Generales de Matriculación de fs. 47vta., por cuyo art. 1º, el Colegio se reserva el derecho de admisión y permanencia de los alumnos), de lo que fluye el que le asiste a denegar la reinscripción para el curso escolar siguiente. Tal facultad no se condiciona a problemas - que, felizmente, no son aparentes- de conducta o de aprendizaje por parte de los alumnos. Es fuente del "Manual para padres" (fs. 164 y sigs.) -y no existen fisuras al respecto en los dichos de los testigos que depusieran a oferta de la actora (fs. 288/290, fs. 334/335, fs. 336) y de la demandada (fs. 292/293, fs. 295/297, fs. 299/300, fs. 332/333)- que los padres de los alumnos participan de la comunidad educativa, lo que les impone comportamientos cuya inobservancia puede hacer imposible la integración de aquélla. En ese sentido, el señor Juez anterior halló en el "e-mail" reproducido a fs. 52/53 un cuestionamiento ("desmedido", dijo) de la actividad de la dirigencia de la escuela, generándose una situación de tensión entre la institución educativa y los actores, incompatible con lo que debe ser el proceso de enseñanza de la hija menor de éstos. Y le asistió razón. Según el apelante, el correo electrónico remitido por el sr. L., el 11 de octubre, a 34 casilleros de "e-mail", pertenecientes a familias de alumnos del colegio demandado, habría sido redactado "con alguna ironía, pero con respeto" (fs. 358vta.). Por contraste, para las autoridades del colegio -a cuyo comportamiento como tales aludía- fue ofensivo. Coincidieron en esa calificación 3 de los 4 testigos propuestos por la demandada (BUGLIONE a fs. 292/293, RASORE a fs. 295/297 y el gerente y administrador CAFIERO a fs. 299/300 -quien personalmente se sintió "involucrado peyorativamente"-). Y aunque no la afirmaron el restante (DEL BONO a fs. 332/333) ni los ofertados por la actora (ALCHOURON a fs. 288/290, MARIANO a fs. 334/335 y CARDOSO a fs. 336), resulta inequívoco de los dichos de

estos últimos que las autoridades aludidas se consideraron ofendidas, siendo unánime la coincidencia de todos los testigos en que hubo gestiones posteriores en que se propuso que el remitente se retractara. También, en que se atuvo a su derecho a no hacerlo, magüer la comunicación que se le hiciera el 25 de octubre de "que la Comisión Directiva ... ha resuelto poner bajo su consideración la aceptación o no de la matrícula de su hija ... para el año 2002". Es entonces de toda obviedad que -allende la mayor o menor potencialidad hiriente que pudiese atribuírsele, según cada individual susceptibilidad-, el despacho fue causa de una situación de tensión entre la institución educativa y los actores, como acertadamente comprobara el señor Juez anterior y no rebate la apelante. Tensión, agrego, que pudo haber sido disipada mediante la aconsejada palinodia, a la que los actores no accedieron. Frente entonces a los derechos que sin duda asisten a los actores para expresarse libremente y para escoger la educación que para su hija prefieran, se yergue también el del instituto educativo privado a rehusar la admisión y permanencia de los alumnos. Este derecho no está condicionado a los límites que de lege ferenda propone el autor que tanto el apelante cuanto al juez citaron, y carentes, por lo visto, de consagración normativa. Es indiferente que las comunicaciones de fs. 54 y fs. 55 no expresaran la causa de la decisión: en la demanda se la pone de manifiesto sin ambages, y aquéllas no pudieron ser imprevistas para los actores desde su anoticiamiento del desagrado causado por el "e-mail". Pero es inconcuso que, así fuese justísima la causa que animara a su remitente a propagar los conceptos en él vertidos, no menos cierto es que se ofendieron las autoridades del colegio de su hija, y no obtuvieron la compunción de aquél. Tal obduración hace irrelevante que la susceptibilidad de aquéllas fuera excesiva, o que asistiese razón al actor para estar disconforme con el aumento del precio de la matriculación o con los costos escolares, porque afectó al diálogo necesario en una óptima comunidad educativa como la que la demandada dice ser, y los actores dicen pretender.

4

La circunstancia de que "e-mail" no fuera remitido al colegio sino a padres de sus alumnos no hace menos graves sus consecuencias, por la repercusión que tuvo. Tampoco la de que en la sentencia no se identificara expresión alguna ofensiva, en general ni en particular, no desnerva la univocidad que esa aptitud tuvo en el caso conforme a los indicados testimonios (art. 456 CPCC). En consecuencia, el derecho que a la demandada asistía no se ejerció de modo irrazonable ni abusivo. Cuanto más si se repara -por notorio- en la multiplicidad de buenas escuelas privadas y públicas en la misma vecindad, no habiendo perdido la niña su educación en el presente ciclo (ver fs. 259). No siendo menester examinar otros argumentos, habiéndose tratado los suficientes para la adecuada solución del caso, voto por la

afirmativa. A la misma cuestión, los señores Jueces doctores Bialade y Krause, por iguales consideraciones, votaron también por la afirmativa.

A la tercera cuestión, el Juez Malamud dijo:

Atento a la forma en que se decidieron las anteriores cuestión, corresponde confirmar la sentencia apelada, en cuanto fuera materia de recurso, con costas (art. 68 CPCC), postergándose la regulación de honorarios (art. 31, decr. ley 8904). Tal mi voto. A la misma cuestión, los señores Jueces doctores Bialade y Krause, por iguales consideraciones, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, se confirma la sentencia apelada, en cuanto fuera materia de recurso, con costas (art. 68 CPCC), postergándose la regulación de honorarios (art. 31, decr. ley 8904).

Regístrese. Devuélvase.//

FDO.: Daniel Malamud - Roger André Bialade - Juan Ignacio Krause Claudia Artola, Secretaria.

fc *Reciba información sobre
Cursos –Carreras – Congresos – etc.*
Solicite el Boletín Mensual a:
cursos@fernandocarlos.com.ar
Tel: (011) 4487 – 1496

fc *Actos Públicos – Fechas de inscripción
Demás info de La Matanza*
Recíbala por correo electrónico.
Solicítela a:
matanza@fernandocarlos.com.ar
Tel: (011) 4487 – 1496

fc *Asesoramiento Jurídico a Docentes
Dr. Fernando Carlos IBÁÑEZ*
Docente – Abogado
Tel: (011) 4487 – 1496
abogado@fernandocarlos.com.ar
www.fernandocarlos.com.ar